
Editorial

La globalización es un proceso multidimensional, complejo, que interconecta todas las formas de mercados apoyándose en las tecnologías de información y comunicación. En su núcleo encontramos el fundamentalismo de mercado, factor ideológico de las instituciones financieras internacionales que, al decir de Stiglitz, no es bueno ni como política ni como economía, al fundarse en principios relativos al funcionamiento de los mercados que no se cumplen “ni en países desarrollados”.

Los efectos más negativos de la globalización han emergido de la dinámica de los mercados financieros y de capital. No es posible alimentar expectativas de crecimiento a partir de flujos de dinero caliente que hoy entran y mañana salen de un país.

La globalización ha servido para acentuar las desigualdades a nivel mundial, nacional y local. Como afirma Estefanía “los ciudadanos han visto desnudas la codicia, la avaricia, la desigualdad, la exclusión sin velos de ningún tipo”. Este es el espectro que recorre el mundo, el de la “enfermedad moral del capitalismo”, porque en el fondo, la esencia de los problemas económicos, políticos y sociales que aquejan al hombre son de naturaleza moral.

Los defensores a ultranza de la globalización, tal como ha sido impuesta por el FMI, BIRF y la OMC, con el apoyo del G7, olvidan que los mercados desregulados no son el resultado de la evolución social. Ellos son un engendro de la ingeniería social y política, mantenidos por el Estado, el cual “es capaz de impedir que las necesidades humanas de seguridad y de control de riesgo económico encuentren expresión política” (Gray John).

Este engendro de ingeniería político-social persigue esencialmente la búsqueda de la eficiencia, sometiendo a la sociedad al imperativo del mercado, no importa a qué costes sociales, entre ellos, una alta tasa al desempleo particularmente no calificado lo cual atenta contra la cohesión social y la democracia. Como acertadamente afirma Gray “en el curso normal de la vida democrática, el libre mercado tiene siempre una vida corta. Sus costos sociales son tales que ninguna democracia puede legitimarlo durante mucho tiempo”.

En el caso de nuestro país, en el cual desde inicios de los 90, de forma particular, se han implementado reformas que consultan este proceso globalizador y de liberalismo económico extremo las políticas macroeconómicas deben ser matizadas con el reconocimiento explícito de que todo individuo como partícipe de la sociedad es un ciudadano depositario de derechos, sean estos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. A partir de ello debe privilegiarse un ordenamiento institucional fundado en valores que regulen la acción de las fuerzas del mercado. Esto es fundamental para que la nación y lo local sigan siendo los espacios naturales a través de los cuales discurra el quehacer democrático (Ocampo J. y Martín J.).

La exclusión de lo social de la vida nacional en el marco de políticas económicas que responden a las fuerzas de la globalización, conduce a que esta última se manifieste como una potencia excluyente y empobrecedora, donde la intervención del Estado es una necesidad perentoria para mantener la cohesión de la vida nacional y disminuir la vulnerabilidad de los grupos más débiles, específicamente en salud, educación, empleo y protección social.

Alcanzar altas tasas de crecimiento y estabilidad macroeconómica con equilibrio fiscal y control de la inflación, a expensas de la destrucción de lo social y de la miseria humana, es un “ideal social anómalo y peligroso” (Gray J.).